



Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Distr. general
14 de octubre de 2013
Español
Original: francés

Comité contra la Tortura 48º período de sesiones

Acta resumida de la 1067ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el viernes 11 de mayo de 2012, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. Grossman

Posteriormente: Sr. Wang Xuexian
(Vicepresidente)

Posteriormente: Sr. Grossman

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del
artículo 19 de la Convención (*continuación*)

Tercer informe periódico de Armenia (continuación)

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, *dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento*, a la Dependencia de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después del período de sesiones.

Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención (continuación)

Tercer informe periódico de Armenia (CAT/C/ARM/3; CAT/C/ARM/Q/3; CAT/C/ARM/Q/3/Add.1; HRI/CORE/1/Add.57) (continuación)

1. *Por invitación del Presidente, la delegación de Armenia vuelve a tomar asiento a la Mesa del Comité.*
2. **El Sr. Harutyunyan** (Armenia) dice que las novatadas contra reclutas jóvenes por parte de oficiales constituyen una práctica del pasado que ya no tiene vigencia en el ejército. En respuesta a la solicitud de estadísticas sobre la violencia en las fuerzas armadas, el orador indica que en 2011 se denunciaron 317 casos de insultos o actos violentos contra un superior o un subordinado o entre soldados de la misma graduación; 4 de ellas se archivaron por ausencia del cuerpo del delito, y las 313 restantes conllevaron la incoación de diligencias judiciales. De estas 313 causas, 218 dieron lugar a acciones judiciales, de las que 191 se resolvieron con la condena de 248 militares y 27 están todavía pendientes de resolución. Se puso fin al procedimiento en 36 causas como consecuencia de la amnistía pronunciada en mayo de 2011, y en 3 causas debido a la fuga de los inculpados. En 2011, 36 reclutas fallecieron mientras realizaban el servicio militar: 10 fallecieron a manos de soldados de Azerbaiyán en la frontera, 2 fueron asesinados, 2 murieron como consecuencia de agresiones graves, 9 se suicidaron y los demás fallecieron por accidente, enfermedad u otros incidentes lamentables. Si el Comité lo desea, la delegación podrá facilitarle estadísticas más detalladas ulteriormente.
3. El Ministerio de Defensa elabora cada año un programa de medidas para luchar contra la violencia en el ejército y restablecer la disciplina, en estrecha colaboración con la Fiscalía Militar. En 2011 se creó una comisión de prevención de la violencia en las fuerzas armadas presidida por el Viceministro de Defensa, la cual examina todos los aspectos del problema para encontrar soluciones concretas. En colaboración con expertos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el Ministro de Defensa y el Fiscal Militar elaboraron una Ley de disciplina en el ejército que entró en vigor el 28 de abril de 2012. Actualmente se está preparando una guía de aplicación de esta nueva Ley para los fiscales, jueces y comandantes del ejército con el fin de posibilitar una aplicación uniforme y efectiva de las nuevas disposiciones y, de este modo, reducir los riesgos de corrupción y prevaricación en el ejército. Entre los cambios introducidos por la nueva Ley, cabe señalar la supresión del arresto como medida disciplinaria y su sustitución por la prestación obligatoria de servicio en un batallón especial durante 30 días como máximo.
4. El Ministro de Defensa y el Fiscal Militar también han elaborado, en colaboración con expertos de la OSCE, propuestas de enmienda al capítulo del Código Penal relativo a las infracciones cometidas contra militares o por militares, propuestas que el Parlamento examinará en su período de sesiones de otoño. En estas propuestas se mantiene la clasificación de las infracciones actualmente vigente, pero se prevén penas diferentes en función de la graduación del autor.
5. No existen tribunales militares en Armenia. Todas las causas penales en que están involucrados miembros de las fuerzas armadas son juzgadas por los tribunales ordinarios. El Servicio de Investigación del Ministerio de Defensa, que se encarga de las investigaciones preliminares de las violaciones del reglamento militar y de las infracciones cometidas por militares o contra militares, ejerce sus funciones con total independencia. El Ministerio de Defensa no interviene en modo alguno en las investigaciones, salvo para resolver las cuestiones logísticas. Además, el Presidente de la República es quien nombra y

destituye a los miembros del Servicio de Investigación. La Fiscalía Militar se encarga de velar por que las investigaciones preliminares realizadas por este Servicio estén en conformidad con la ley.

6. En cuanto al fallecimiento de Vardan Sevan, Gevorg Kotinian y Artak Nazarian, en las respuestas escritas (párrs. 182 a 197) se ha proporcionado información detallada sobre los procesos iniciados al respecto y sus resultados. En el caso de Vardan Sevan, cabe precisar que la principal prueba de la hipótesis del suicidio, a saber, la nota manuscrita que figuraba en el reverso de la fotografía encontrada cerca del cuerpo, ha sido objeto de un análisis grafológico, que ha confirmado que dicha nota fue escrita por el fallecido. En el asunto *Nazaryan*, el procedimiento sigue en curso.

7. **El Sr. Petrosyan** (Armenia) dice que la falta de confianza de la población en la policía es un problema heredado de la época soviética que el Gobierno está tratando de resolver. En 2010-2011 se puso en marcha un programa de reforma que incluía hasta 200 medidas relacionadas con todos los aspectos del funcionamiento y el trabajo de la policía, incluida la formación. Un grupo de trabajo está elaborando actualmente un nuevo programa para el período 2012-2013, que incluirá, en particular, medidas destinadas a reforzar el respeto de los derechos de los testigos, los sospechosos y los acusados, como la puesta en marcha de sistemas de videovigilancia en las comisarías. Se preguntó acerca del número de casos en que personas en detención policial habían solicitado ser sometidas a un reconocimiento médico. No se registró ninguna solicitud de este tipo en 2011.

8. El artículo 32 de la Ley de detención y privación de libertad prevé expresamente que, en caso de detención, privación de libertad o traslado de un preso a otro centro de reclusión, se debe informar inmediatamente a la familia del interesado. En materia de detención administrativa, el director del establecimiento tiene la obligación de informar por escrito a la familia en un plazo de tres días. En cuanto a las 53 personas detenidas el 17 de abril de 2010 en el distrito de Nor Nork, cabe señalar que se trataba de miembros de organizaciones delictivas que fueron descubiertos en posesión de armas de fuego y una gran cantidad de munición.

9. La cooperación entre Armenia y la Federación de Rusia en materia penal se rige por la Convención sobre la asistencia judicial y las relaciones jurídicas en asuntos civiles, de familia y penales, de 22 de enero de 1993 (Convención de Minsk), y su correspondiente Protocolo. Los órganos competentes para aceptar o rechazar una solicitud de extradición son el Fiscal General —en caso de que la persona reclamada esté a la espera de sentencia— y el Ministro de Justicia (en caso de que haya un proceso en curso o cuando se haya dictado una sentencia ejecutoria).

10. En Armenia, la homosexualidad no está castigada por la ley y nadie puede ser privado de libertad por este motivo. Sin embargo, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo en el contexto de la prostitución son punibles con sanciones administrativas.

11. **El Sr. Stepanyan** (Armenia), refiriéndose de nuevo al fallecimiento de Vahan Khalafyan, dice que en las respuestas escritas figura una descripción detallada del asunto. Subraya que se abrió inmediatamente una investigación contra los cuatro policías que participaron en la detención, la reclusión y los interrogatorios de la víctima. La calificación que se dio inicialmente a los hechos en aplicación del artículo 110 del Código Penal (actos violentos con resultado de suicidio) se modificó en el transcurso de la instrucción y, finalmente, las calificaciones que se tuvieron en cuenta a los efectos del proceso judicial fueron las de abuso de autoridad con consecuencias graves (artículo 309, párrafo 3, del Código Penal) y prevaricación (artículo 308, párrafo 1, del Código Penal). Dos de los policías imputados fueron declarados culpables y condenados respectivamente a ocho y dos años de prisión. Los otros dos agentes fueron absueltos. Los recursos interpuestos por los familiares de la víctima contra las sentencias de absolución fueron desestimados.

12. Entre 2008 y 2011, el Servicio de Investigación Especial instruyó 22 causas penales en que los acusados eran agentes del Estado: en 21 de ellas estaban involucrados funcionarios de policía, y en la restante estaba implicado un miembro del personal penitenciario. Estas causas se enjuiciaron y se resolvieron mediante 4 condenas a penas de prisión y 18 condenas a penas no privativas de libertad. La causa *Levon Ghulyan* fue juzgada por tres instancias, y todas ellas declararon nulas las conclusiones de los órganos de instrucción. Las pruebas recogidas se consideraron insuficientes y la causa se archivó. Los representantes legales de la víctima han sometido el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

13. En cuanto a los acontecimientos del 1 de marzo de 2008 que provocaron la muerte de 10 personas, el orador dice que, al igual que la Sra. Gaer, lamenta que todo el trabajo realizado no haya permitido todavía establecer las responsabilidades en este asunto. Con todo, la investigación ha cobrado un nuevo impulso, ya que el Presidente de la República ha solicitado a los órganos encargados de la investigación que intensifiquen sus esfuerzos intercambiando información, analizando de nuevo las declaraciones de los testigos y las conclusiones de los expertos y, de ser necesario, nombrando a nuevos expertos. El grupo de investigación se ha visto reforzado con la llegada de nuevos especialistas con una dilatada experiencia en este tipo de asuntos, y se ha nombrado a un nuevo jefe para dirigirlo. Todos los elementos del caso se están reexaminando; se ha hecho un llamamiento para que comparezcan los posibles testigos, lo que ha permitido tomar declaración a 500 nuevos testigos. El Fiscal General ha solicitado a los responsables de la investigación que se reúnan con los medios de comunicación dos veces al mes para informarles de los progresos realizados.

14. La legislación armenia prevé la protección de los testigos y de cualquier otra persona que aporte informaciones conducentes a la identificación de los autores de una infracción penal. Esta protección se extiende igualmente a los familiares de dichas personas. Las autoridades judiciales pueden ordenar medidas de protección por propia iniciativa o en respuesta a una solicitud que el interesado haya formulado por escrito. En este último caso, la solicitud se estudia durante 24 horas como máximo y la decisión se comunica inmediatamente al interesado. En caso de denegación, se puede presentar posteriormente otra solicitud si aparecen nuevos elementos. Las medidas que pueden adoptarse incluyen la protección física, la protección de la identidad y de informaciones personales, la vigilancia telefónica y otras medidas que conlleven la utilización de medios técnicos, el cambio de apariencia física y de identidad, y la reubicación.

15. Un miembro del Comité ha manifestado su preocupación por los posibles conflictos de intereses relacionados con las potestades de la Fiscalía en materia de instrucción. A este respecto cabe señalar que, desde la aprobación en 2007 de la Ley de la Fiscalía, esta ya no ejerce ninguna función de instrucción, sino que se encarga de vigilar la legalidad de las investigaciones preliminares y las investigaciones penales, así como la ejecución de las penas.

16. En virtud del artículo 12 del Código Penitenciario, los condenados pueden presentar una denuncia en caso de que se violen sus derechos. Estas denuncias no son censuradas en modo alguno. Los órganos competentes deben examinarlas y comunicar su decisión en los plazos previstos por la ley. Además, quienquiera que ejerza presión sobre una persona condenada por presentar una denuncia será objeto de acciones judiciales.

17. Los extranjeros encarcelados en territorio armenio tienen la posibilidad de ponerse en contacto con su consulado o embajada, y aquellas personas cuyo país de origen no tenga representación en Armenia, así como los apátridas y los refugiados, tienen derecho a ponerse en contacto con los servicios consulares del país que se ocupe de sus intereses o con una organización internacional.

18. En lo que respecta a la Oficina del Defensor Público, el **Sr. Demirtshyan** (Armenia) dice que la legislación se modificó en 2009 y que la asistencia letrada gratuita, que anteriormente solo se aplicaba a las causas penales y a ciertas causas civiles, se amplió a todas las causas civiles. Los abogados de oficio, cuyo número se ha duplicado en los últimos cinco años, pueden actuar ahora en todo el territorio. La Oficina del Defensor Público está financiada por el Estado, pero funciona con total independencia. Los abogados de oficio perciben salarios plenamente competitivos, y el nivel de confianza de la población en ellos ha aumentado de forma considerable. Recientemente se ha creado una escuela de formación de abogados para mejorar aún más sus competencias profesionales.

19. La prestación de atención médica a los reclusos está garantizada y regulada por ciertas leyes y reglamentos. Toda persona que llega a un establecimiento penitenciario es sometida obligatoriamente a un reconocimiento médico, y toda lesión o signo manifiesto de violencia es notificado debidamente para que se inicie el procedimiento correspondiente.

20. La Oficina del Mediador se financia principalmente con cargo al presupuesto estatal. La Ley del Mediador se ha modificado para reforzar la independencia del Mediador y permitir que este desempeñe de forma más eficaz la función de mecanismo nacional de prevención que se le ha confiado. El Mediador ha creado un consejo especial, compuesto por expertos y representantes de la sociedad civil, que se encarga de las cuestiones relacionadas con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

21. En lo que respecta a la aplicación de las recomendaciones relativas a la situación de los derechos humanos en el Estado parte, cabe señalar que Armenia está a punto de presentar su segundo informe periódico en el marco del Examen Periódico Universal. En 2011, un grupo de trabajo interministerial se encargó de estudiar todas las recomendaciones que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y otras instituciones y órganos de las Naciones Unidas también formularon en el marco del Examen Periódico Universal. La delegación no dispone de cifras acerca del número de quejas recibidas por el Defensor de los Derechos Humanos, quien no las ha incluido en su informe anual.

22. Armenia vela por el respeto de todas las garantías enunciadas en la Convención antes de decidir la extradición de una persona. Si recibe quejas de las personas que ha extraditado, toma medidas inmediatamente para visitarlas o resolver el problema de otra manera junto con las autoridades competentes. Se han incluido disposiciones a tal fin en los acuerdos bilaterales, como el suscrito con la República Islámica del Irán. Además, Armenia autoriza a los Estados que han extraditado a una persona a su territorio a visitarla.

23. No existen incoherencias entre la Ley sobre refugiados y asilo y la Ley sobre las fronteras del Estado. En cambio, existe una divergencia entre las disposiciones de la Ley sobre refugiados y asilo y las del Código Penal. Por un lado, la primera dispone que los refugiados y los solicitantes de asilo que hayan entrado ilegalmente en el territorio están exonerados de responsabilidad penal. Por otro, el Código Penal considera penalmente responsables a las personas que cruzan la frontera de forma ilegal, salvo aquellas que entran en territorio armenio para solicitar asilo político; sin embargo, no dice nada respecto de los refugiados. El problema se está analizando, y la delegación armenia va a reunirse próximamente con representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados con el fin de estudiar la posibilidad de enmendar el Código Penal para que la exoneración se aplique también a los refugiados.

24. Los presos extranjeros permanecen encarcelados generalmente en un establecimiento separado, cuyas condiciones son en ocasiones mejores que las de los centros donde se recluye a los ciudadanos armenios. No son víctimas de discriminación racial alguna, y nunca se les ha impedido ponerse en contacto con los servicios

diplomáticos o consulares de su país de origen. Además, su situación es objeto de seguimiento por parte de organizaciones no gubernamentales (ONG).

25. El Grupo de supervisión pública se creó en 2004; está compuesto por representantes de ONG y tiene como cometido supervisar la situación de los derechos humanos en los establecimientos penitenciarios. Sus miembros pueden acceder libremente a todos los lugares de reclusión y tienen derecho a entrevistarse en privado con los presos. El Grupo elabora cada año un informe que es publicado por el Ministerio de Justicia.

26. Las malas condiciones materiales y el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios siguen siendo un problema en Armenia, pero se están haciendo progresos importantes. Se han renovado varios establecimientos y se está construyendo una nueva prisión. Asimismo, se han adoptado medidas para reducir la población penitenciaria, como la mejora de la aplicación de la libertad condicional anticipada, la revisión de los requisitos necesarios para que una condena pueda cumplirse en un establecimiento de régimen abierto, la diversificación de las penas sustitutivas de la privación de libertad y el refuerzo de su aplicación, y la limitación de la utilización de la prisión provisional como medida preventiva.

27. Los niños que delinquen no son suficientemente numerosos para justificar la creación de un tribunal especializado. Sin embargo, todos los tribunales cuentan con un juez que se encarga de este tipo de asuntos. En la policía existe una división especial que se ocupa de los asuntos relacionados con niños, y la legislación penal contiene disposiciones especiales sobre los niños que delinquen. La readaptación y la reinserción social de estos jóvenes se llevan a cabo en centros especialmente destinados a tal fin, con la ayuda de la sociedad civil y de organizaciones internacionales. Armenia es consciente de que es necesario realizar reformas en esta esfera y prevé establecer un mecanismo encargado de las cuestiones relativas a la justicia juvenil.

28. La Ley de la administración pública prohíbe a los funcionarios dar órdenes contrarias a la Constitución y a las leyes de la República de Armenia o que excedan de sus prerrogativas. En caso de duda sobre la legalidad de una orden recibida, el funcionario en cuestión debe hacerlo saber inmediatamente y por escrito a la persona que haya dado la orden y a su superior jerárquico. Si la orden se confirma por escrito, el funcionario debe ejecutarla, salvo cuando ello comprometa su responsabilidad administrativa o penal. Además, el artículo 47 del Código Penal dispone que el hecho de vulnerar los intereses protegidos por la legislación penal al ejecutar una orden no constituye una infracción penal. En cambio, se podrá exigir responsabilidad penal a la persona que haya dado la orden. Un funcionario que se niegue a ejecutar una orden manifiestamente ilegal no podrá ser considerado penalmente responsable.

29. En la normativa penitenciaria aprobada por decreto gubernamental se enuncian claramente los casos en que los presos menores de edad pueden ser recluidos en celdas de castigo; se trata esencialmente de casos de faltas graves al reglamento, como el acoso a otros presos o la posesión o utilización de artículos prohibidos. La duración máxima de la reclusión de un menor de edad en una celda de castigo es de diez días. Si el Comité así lo recomienda, dicha duración se podrá reducir mediante nuevas enmiendas legislativas.

30. Los mecanismos de denuncia a disposición de los presos están previstos por la ley. Los presos pueden acceder a ellos sin restricciones y someter sus denuncias a los tribunales, a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia. También pueden dirigirse a las instituciones de la sociedad civil, al Mediador, a las organizaciones de defensa de los derechos humanos o incluso al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT). Se respeta la confidencialidad de la correspondencia. Próximamente se creará un nuevo servicio de seguimiento de las personas en libertad condicional, de conformidad con el Plan de Reforma Judicial para 2012-2016. Este

servicio, que no pertenecerá al sistema penitenciario, se encargará de las cuestiones relativas a las penas sustitutivas, la libertad condicional y la readaptación. Se ocupará sobre todo de reforzar la aplicación de las penas de sustitución con el fin de reducir el hacinamiento penitenciario.

31. **La Sra. Vardapetyan** (Armenia) dice que la jurisprudencia del Tribunal de Casación es vinculante para todos los tribunales en virtud del artículo 92 de la Constitución. Esta jurisprudencia uniformiza la práctica judicial, reduce al mínimo las posibilidades de interpretación arbitraria de la legislación nacional y refleja la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

32. En lo que respecta a las medidas disciplinarias adoptadas contra el juez Mnatsakanian, cabe aclarar que el procedimiento disciplinario fue iniciado por el Consejo de Justicia, que es el órgano competente en la materia. En junio de 2011, el Consejo decidió solicitar la suspensión del juez por dictar una sentencia insuficientemente motivada y considerada como arbitraria. El juez Mnatsakanian recurrió la decisión del Consejo de Justicia aduciendo que en realidad había sido sancionado por poner a un acusado en libertad bajo fianza. Se puede consultar el texto de las decisiones pertinentes en el sitio web del Ministerio de Justicia (www.court.am). La cuestión de la imparcialidad y la independencia de los jueces ocupa un lugar central en las reformas de la justicia penal que están en curso en Armenia. El informe de la OSCE mencionado por la Sra. Gaer ha desempeñado un papel importante en este ámbito, y las recomendaciones que se formulan en él se han tenido en cuenta en los programas de formación de los jueces.

33. En cuanto a la indemnización de las víctimas de la tortura, la oradora dice que, en virtud del Código Civil, los daños y perjuicios provocados a los ciudadanos por los actos ilegales cometidos por los órganos del Estado o sus representantes dan lugar a una reparación. Además de estas disposiciones legislativas, el derecho a una indemnización está garantizado por la jurisprudencia del Tribunal de Casación, en particular por el fallo dictado en la causa *Mikaelyan*, en la que los jueces se pronunciaron sobre la cuestión del pago de una indemnización a una persona privada de libertad ilegalmente. La misma obligación se aplica en los casos de tortura y de tratos inhumanos o degradantes.

34. *El Sr. Wang Xuexian (Vicepresidente) ocupa la Presidencia.*

35. **La Sra. Gaer** (Relatora para Armenia) pregunta cuándo se aprobarán las modificaciones al Código Penal para incluir en él una definición de la tortura que sea conforme a la enunciada en el artículo 1 de la Convención, y si se podrían facilitar copias del proyecto pertinente a los miembros del Comité. Además solicita aclaraciones sobre las estadísticas relativas a los casos de malos tratos en el ejército que la delegación ha citado durante el diálogo. En particular, desearía saber cuántas de las 191 causas juzgadas en 2011 guardaban relación específicamente con novatadas y actos contemplados en el artículo 16 de la Convención, y cuáles fueron las penas impuestas a los culpables. También pregunta si los seis fallecimientos de militares registrados en 2011 han sido investigados. En caso afirmativo, la Relatora desearía saber si se ha establecido que dichos fallecimientos se debieron a novatadas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y si se han iniciado acciones judiciales.

36. En cuanto a la causa *Grigorian*, relativa a un soldado a quien su superior propinó una paliza en octubre de 2010, la Relatora invita a la delegación a explicar por qué el oficial enjuiciado no ha sido suspendido de sus funciones desde el inicio del proceso incoado contra él y cómo puede ser que, a pesar de la gravedad de sus actos, se beneficiara de una amnistía poco tiempo después de ser declarado culpable. También solicita a la delegación que indique si se ha realizado una investigación independiente acerca del caso *Vardan Martirosian*, en el que estaba implicado un comandante del ejército que había propinado violentas palizas a soldados que estaban bajo sus órdenes y que además estaba acusado de

corrupción. Asimismo la Relatora invita a la delegación a confirmar si el servicio competente del Ministerio de Defensa ha iniciado una investigación sobre el suicidio de Artak Nazarian, que se produjo a consecuencia de los malos tratos que le infligieron sus superiores, y si el juicio se ha celebrado en Armenia aunque los hechos se produjeran en Nagorno-Karabaj. Sería útil recibir aclaraciones sobre el número de jóvenes condenados a una pena de prisión por negarse a realizar el servicio militar o civil y sobre cuándo se prevé aprobar el proyecto de ley sobre el servicio sustitutivo.

37. En lo que respecta al caso *Khalafyan*, la oradora señala que los padres de la víctima rechazaron la tesis del suicidio y afirmaron que se trataba de un homicidio, y pregunta si se ha iniciado una investigación sobre estas alegaciones. Se agradecería recibir estadísticas sobre el número de funcionarios de policía que han sido objeto de sanciones disciplinarias o penales por no respetar las garantías jurídicas fundamentales que protegen los derechos de las personas privadas de libertad. En cuanto a la operación policial llevada a cabo en abril de 2010 en el distrito de Nor Nork, sería interesante saber si se ha iniciado una investigación sobre las denuncias de malos tratos a los detenidos durante esta operación y, en caso afirmativo, cuáles han sido los resultados. Se agradecería recibir estadísticas sobre el número de personas extraditadas a la Federación de Rusia en aplicación del acuerdo bilateral suscrito con ese país.

38. Según el informe del CPT sobre la visita que efectuó a Armenia en 2010, un grupo de presos denominados "los homosexuales" son víctimas de discriminación, tratos degradantes y actos de violencia en la prisión de Kosh. La Relatora pregunta qué medidas ha adoptado el Estado parte para poner fin a esta situación. Asimismo, desearía recibir información sobre las indemnizaciones concedidas a las víctimas de violaciones de las disposiciones de la Convención y sobre el número de funcionarios de policía condenados por violación de los artículos 308 y 309 del Código Penal que han cumplido una pena de prisión. La Relatora solicita a la delegación que precise si las cuatro personas condenadas por abuso de autoridad durante el período 2008-2010 eran miembros de las fuerzas del orden y si se han destinado más recursos a la asistencia letrada gratuita y al defensor de los derechos humanos. Asimismo, pide a la delegación que describa las medidas adoptadas por las autoridades armenias para hacer un seguimiento de la situación de las personas que ha extraditado a la República Islámica del Irán y a la Federación de Rusia previa obtención de garantías diplomáticas.

39. Aunque toma nota de las respuestas facilitadas por la delegación acerca de los tres periodistas víctimas de acoso, la oradora señala que no parece que se hayan adoptado medidas para identificar y enjuiciar a los autores de los actos denunciados y que uno de los afectados ha retirado su denuncia tras recibir amenazas. Pide a la delegación que proporcione datos adicionales sobre estas causas y sobre las medidas adoptadas por el Estado parte para luchar contra el acoso a los periodistas. Por último, solicita más información sobre las 23 denuncias por abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza y obtención de confesiones mediante coacciones que, según las respuestas de la delegación, se presentaron en 2009 y 2010 contra miembros del Servicio de Investigación del Ministerio de Defensa, y pregunta si estas denuncias han dado lugar a investigaciones, enjuiciamientos y sanciones disciplinarias o penales.

40. *El Sr. Grossman (Presidente) vuelve a ocupar la Presidencia.*

41. **El Sr. Wang Xuexian** (Relator suplente para Armenia) observa que la delegación no ha respondido a varias preguntas formuladas por él durante la primera parte del examen del informe (véase CAT/C/SR.1064). Desearía recibir información acerca de las siguientes cuestiones: la eficacia de las actividades de formación en materia de derechos humanos y de la formación impartida a los guardias fronterizos; la obligatoriedad o no de la presencia de un abogado durante los interrogatorios independientemente del tipo de causa; la práctica de la policía consistente en invitar a una persona a declarar en la comisaría como testigo

fundamental y posteriormente considerarla como sospechosa y mantenerla recluida en detención policial; la diferencia existente entre los términos "propuestas", "peticiones" y "quejas" utilizados en el párrafo 45 del informe presentado por Armenia en el marco del Examen Periódico Universal (A/HRC/WG.6/8/ARM/1); las modalidades de reparación distintas de las financieras concedidas a las víctimas de la tortura; la intención del Estado parte respecto de la promulgación de una ley para prohibir totalmente los castigos corporales; la causa *Armen Martirosyan*, relativa a un joven que al parecer se suicidó tras ser torturado en un centro de reclusión de menores; la corrupción en los establecimientos penitenciarios; y las incoherencias entre la Ley sobre refugiados y asilo y la Ley sobre las fronteras del Estado.

42. **El Sr. Mariño Menéndez** reformula ciertas preguntas que había planteado durante la primera parte del examen del informe del Estado parte. Concretamente, desearía saber cuál es la autoridad facultada para adoptar decisiones en materia de concesión de la asistencia letrada gratuita y en qué casos se concede dicha asistencia. Dado que Armenia ha ratificado el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, de 1999 (Nº 182), de la Organización Internacional del Trabajo, el orador desearía saber hasta qué edad es obligatoria la escolaridad en Armenia. También pregunta si la legislación nacional autoriza a los jueces a ordenar la detención en régimen de incomunicación de un sospechoso y de qué forma el Grupo de supervisión pública y el Defensor del Pueblo coordinan sus actividades en el ámbito de la vigilancia de los establecimientos penitenciarios. Volviendo a la cuestión de la modificación de la condición jurídica de los testigos citados a comparecer por la policía, el orador pregunta quién adopta la decisión de considerar a una persona como sospechosa en lugar de testigo. Por último, en el caso de que un civil fuera torturado en un establecimiento militar, el orador pregunta si la causa sería de la competencia de los tribunales militares o de los tribunales civiles.

43. **El Sr. Bruni** pregunta por qué la pena máxima aplicable a los autores de actos de tortura es solo de tres años y si el Estado parte prevé modificar las disposiciones pertinentes de la legislación interna para que esta prevea penas proporcionales a la gravedad de tales actos. En lo que respecta a las tres sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos citadas en el párrafo 214 del informe, el orador pide a la delegación que indique si estas sentencias se han ejecutado según las modalidades descritas en el párrafo 215 del informe y, asimismo, que precise el monto de la indemnización concedida en cada caso y la forma en que se calculó. Por último, el orador pregunta si Armenia tiene previsto realizar la declaración contemplada en el artículo 22 de la Convención.

44. **La Sra. Belmir** observa que todavía se puede exigir la responsabilidad penal a los jueces, si bien, en las observaciones finales precedentes (A/56/44, párr. 39 e)), el Comité había recomendado a las autoridades armenias que adaptaran el régimen de responsabilidad penal de los jueces conforme a los instrumentos internacionales pertinentes, con el fin de garantizar la independencia del poder judicial. La oradora agradecería recibir comentarios sobre esta cuestión.

45. **El Sr. Domah** pregunta si un particular puede recurrir al Tribunal Constitucional para pedirle que se pronuncie sobre una cuestión relacionada con el objeto de la Convención. Asimismo, desearía saber si el Colegio de Abogados es independiente y, en caso afirmativo, qué iniciativas emprende para proteger el sistema judicial frente a las injerencias de otros poderes. Por último, el orador dice que resulta alarmante que un juez haya sido revocado y que otros estén siendo objeto de un procedimiento de revocación, y solicita explicaciones al respecto a la delegación.

46. **La Sra. Sveaass**, retomando ciertas cuestiones sobre las cuales todavía no ha recibido respuesta, solicita aclaraciones sobre los recursos de que disponen las personas que han sido víctimas de violaciones de las disposiciones de la Convención o de sus derechos fundamentales para reclamar una reparación. Desearía saber cuántas personas han obtenido

reparación y si esta incluía servicios de readaptación. También pregunta si ha de ser imperativamente un tribunal el que ordene la concesión de reparación o si también puede hacerlo un órgano administrativo. Por último, ruega a la delegación que indique cuándo prevé el Estado parte introducir en el Código Penal disposiciones que tipifiquen plenamente como delito la violencia doméstica y si se han creado centros de acogida para las víctimas de la trata en el país.

47. **El Sr. Tugushi** pregunta si se han adoptado medidas para trasladar a los presos que cumplen una pena de cadena perpetua en las prisiones de Kentron y Nubarashen a otros establecimientos, ya que, según el informe del CPT, las condiciones de reclusión en estas dos prisiones son deplorables. También sería útil saber si se ha abolido la práctica de esposar a esta categoría de presos cada vez que salen de su celda. Se agradecería recibir informaciones más detalladas sobre los proyectos de renovación de los centros de reclusión en curso.

48. **El Presidente** cree entender que, en el artículo 341 del Código Penal, los actos de violencia infligidos a una persona para obtener una confesión por la fuerza solo se consideran como actos de tortura cuando se cometen en el marco de un proceso penal. Asimismo, parece que, en virtud del artículo 180 del Código Penal, un sospechoso detenido por la policía solo puede contactar con su abogado tras el levantamiento del acta de detención. Además, el artículo 243 del Código de Procedimiento Penal no permite que el abogado del sospechoso solicite que su cliente sea sometido a un examen forense, y que este solo puede ser efectuado por orden del fiscal. Se ruega a la delegación que indique si estas informaciones son correctas.

49. **El Sr. Kirakosyan** (Armenia) dice que el proyecto de ley para modificar el artículo 119 del Código Penal, que está siendo examinado actualmente por el Parlamento, contiene una definición de la tortura que es plenamente conforme a la Convención y prevé penas más severas para los actos de tortura. En cuanto a las amnistías de que se han beneficiado algunas personas declaradas culpables de infracciones contempladas en ese artículo, el orador indica que el Estado parte es consciente de que, en virtud de la Convención, los actos de tortura no pueden ser objeto de amnistía; sin embargo, subraya que los hechos contemplados en las disposiciones actuales del artículo 119 no se corresponden exactamente con los contemplados en la definición de tortura enunciada en la Convención. En todo caso, la armonización de la definición de tortura que figura en la legislación armenia con la que figura en la Convención permitirá solucionar este problema y observar las disposiciones del derecho internacional en la materia.

50. En cuanto al ciudadano armenio acusado de cometer un delito en Nagorno-Karabaj, el orador precisa que esta persona efectuaba allí su servicio militar de forma voluntaria. Ahora bien, aunque los delitos cometidos por ciudadanos armenios en Nagorno-Karabaj son competencia de Armenia en virtud de un acuerdo suscrito con las autoridades de ese territorio, dicho acuerdo no se aplica a este tipo de casos.

51. Actualmente hay 40 personas que cumplen una pena de prisión por negarse a realizar el servicio militar o un servicio sustitutivo. La Ley del servicio sustitutivo se va a modificar de forma que dicho servicio ya no se realice bajo la supervisión de militares, lo que va en contra de las convicciones de ciertas personas, como los Testigos de Jehová, sino bajo la supervisión de autoridades administrativas.

52. Las autoridades armenias no disponen de información oficial sobre casos de corrupción en las instituciones penitenciarias. La delegación toma nota de las alegaciones formuladas a este respecto, a las que se prestará toda la atención necesaria. Por supuesto, en caso de que dichas alegaciones sean fundadas, las personas involucradas serán castigadas con severidad. Sin embargo, de forma más general, cabe señalar que uno de los principales ejes de las reformas que se están realizando actualmente en el país es la lucha contra la

corrupción en el conjunto de los servicios públicos, en particular las instituciones penitenciarias, los servicios de mantenimiento del orden y la justicia administrativa. Se han elaborado una estrategia y un plan de trabajo en los que se contemplan diversas medidas para luchar contra este fenómeno en su globalidad.

53. Hasta agosto de 2009, Armenia ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cinco causas por violaciones del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Todas las sentencias se han ejecutado, incluida la dictada en la causa *Tadevosyan*, y en todas las causas se han pagado indemnizaciones. Por otro lado, Armenia está estudiando la posibilidad de realizar la declaración prevista en el artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Por último, la aplicación de las recomendaciones formuladas por el CPT permitirá solucionar los problemas señalados por el Sr. Tigushi acerca de las condiciones de reclusión de las personas condenadas a cadena perpetua.

54. **El Sr. Harutyunyan** (Armenia) dice que la delegación no está en condiciones de indicar el número de militares condenados por actos de tortura, dado que la infracción militar de tortura no existe como tal en el derecho armenio. Los datos proporcionados sobre las infracciones cometidas por los militares se refieren a todo tipo de actos violentos, desde la simple bofetada a actos constitutivos de tortura en el sentido de la Convención. Con todo, la delegación analizará estos datos para identificar aquellos que evidencian actos de tortura y comunicará los resultados de dicho análisis al Comité. También le enviará cualquier otra información de que dispongan las autoridades a este respecto. En cuanto a la causa *Vardan Martirosian*, en la que estaban implicados el oficial superior del ejército llamado así y dos de sus subordinados (Artur Karapetian y Arsen Nersisian), la investigación realizada no permitió confirmar que estas personas infligieron torturas o simples actos de violencia a otros militares. Sin embargo, se demostró que estas personas habían estado involucradas en la compra de computadoras destinadas a oficiales que iban a realizar cursos de formación, hechos por los que fueron enjuiciados y castigados. Por otro lado, cabe aclarar que el Servicio de Investigación del Ministerio de Defensa investiga todas las infracciones cometidas por militares o con la participación de militares, independientemente de que la víctima sea un civil o un militar, así como todas las infracciones cometidas en las unidades militares, independientemente de que las personas implicadas sean civiles o militares.

55. **El Sr. Petrosyan** (Armenia) dice que la delegación no dispone de datos estadísticos sobre las medidas de extradición adoptadas en aplicación del acuerdo pertinente suscrito entre la Federación de Rusia y Armenia, pero tales datos existen y la delegación los hará llegar al Comité. En cuanto a las sanciones impuestas a policías, dos agentes fueron condenados en 2009 y cuatro en 2010 por mostrar un comportamiento soez o irrespetuoso con un ciudadano o someterlo a un trato degradante. Las medidas disciplinarias impuestas a policías fueron 55 en 2009 y 23 en 2010.

56. En la práctica, es poco frecuente que una persona pase de tener la condición de testigo de un delito a la de sospechoso o acusado; cuando esto sucede, la persona es tratada según las disposiciones del Código de Procedimiento Penal. Por otro lado, se va a poner en marcha un sistema de videovigilancia en las comisarías, así como un sistema electrónico de levantamiento de actas. En cuanto a los policías que participaron en la operación realizada el 10 de abril de 2010 en el distrito de Nor Nork, que se saldó con la detención de 53 personas, el orador aclara que dichos policías llevaban uniforme, como muestran las fotos publicadas en el sitio www.a1plus.am, y no dispensaron tratos degradantes a ninguno de los detenidos.

57. **El Sr. Stepanyan** (Armenia), en respuesta a las preguntas relativas a la causa *Vahan Khalafyan*, indica que las autoridades responsables de la investigación examinaron todas las hipótesis posibles, en particular las de homicidio o suicidio. El policía implicado en el fallecimiento del Sr. Kkalafyan, Ashot Harutyunyan, fue enjuiciado con arreglo al

artículo 39 del Código Penal y condenado a una pena de ocho años de prisión. Entre 2008 y 2011 se llevaron a cabo 22 investigaciones penales contra policías, que dieron lugar a la inculpación y condena de 19 policías.

58. **La Sra. Soudjian** (Armenia) dice que el Gobierno armenio se esfuerza constantemente por prevenir la violencia sexista y ayudar a las víctimas. A tal fin se ha creado un comité interinstitucional, cuyo cometido es reforzar la aplicación de las medidas de prevención, diseñar mecanismos de recopilación e intercambio de información y elaborar un plan nacional de lucha contra la violencia sexista. Este plan de acción, que se aprobó en junio de 2011, tiene como principal objetivo proteger a las personas expuestas a este tipo de violencia, proporcionarles una ayuda completa y lograr que los autores de tales actos sean enjuiciados y castigados.

59. El artículo 132 del Código Penal se ha revisado para incluir en él una definición más clara y completa de la infracción de trata de personas. Sobre la base de las enseñanzas extraídas de la aplicación del Plan nacional de lucha contra la trata de personas para 2007-2009 y del resultado de las conversaciones mantenidas con ONG y organizaciones internacionales, el Consejo de Lucha contra la Trata elaboró un Plan nacional de acción para 2010-2012. Este Plan tiene como principal objetivo promover la formulación de disposiciones legislativas para reprimir la trata, la adopción de medidas de protección y asistencia en favor de las víctimas y la cooperación en la lucha contra la trata. La asistencia brindada a las víctimas de la trata por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y por ONG especializadas incluye la facilitación de ayuda material, una vivienda, asistencia médica y psicológica, asistencia jurídica y diversas prestaciones sociales. Aunque los casos de trata de niños no son numerosos, el Gobierno trabaja constantemente para prevenir este fenómeno.

60. El Código del Trabajo contiene numerosas disposiciones destinadas a proteger a las personas menores de 18 años, entre ellas: el artículo 257, que dispone que dichas personas no pueden realizar trabajos penosos o peligrosos; el artículo 149, que prevé que dichas personas no pueden hacer guardias, ya sea en la empresa o en un domicilio particular; y los artículos 153 y 154, que enuncian normas precisas relativas a sus horarios de trabajo y al tiempo de descanso al que tienen derecho.

61. El artículo 39 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la educación. La enseñanza primaria es gratuita y obligatoria, salvo en los casos previstos por la ley. La enseñanza secundaria pública es gratuita, y todas las personas tienen derecho, previa superación de un examen de selección, a acceder a la enseñanza superior y profesional, que se imparte gratuitamente en los establecimientos de enseñanza públicos.

62. **La Sra. Abgarian** (Armenia), en lo que respecta a las garantías diplomáticas, dice que, si bien es cierto que Armenia no acostumbra a exigir a otro Estado al que haya extraditado a una persona que le permita hacer un seguimiento de la situación de la misma o que él mismo lleve a cabo dicho seguimiento, cada caso de extradición es objeto de una preparación minuciosa, como demuestra el hecho de que, hasta la fecha, tan solo ha habido un caso de queja por parte de una persona extraditada.

63. **El Sr. Kirakosyan** (Armenia) dice que la delegación facilitará al Comité más información a la mayor brevedad.

64. **El Presidente** agradece a la delegación sus respuestas y la franqueza que ha mostrado en su diálogo con el Comité, y anuncia que el Comité ha concluido el examen del tercer informe periódico de Armenia.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.